

Señor

JUEZ ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BUGA (Reparto)

E. S. D.

Ref: Demanda de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho,
contra la NACION-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA
NACIONAL.

ARNOL CARABALI PIZARRO, varón, mayor de edad y residente en Santiago de Cali, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 16.881.665 expedida en Florida (Valle), Abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 93930 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderado judicial del señor **HAROLD GARCIA BRAVO**, persona mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.403.757, expedida en Cali (Valle), domiciliado en Santiago de Cali (Valle del Cauca), quien será la parte demandante en el presente proceso, ante Usted con todo respeto, me permito presentar medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Art. 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo), en contra de la NACION- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL, representadas legalmente por el señor Ministro de Defensa y el Director General de la Policía Nacional, establecimiento domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C, o quien haga sus veces, para que por los trámites de un proceso ordinario, se *profiera* sentencia sobre las siguientes peticiones:

CAPÍTULO I. DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERA: Declárase nulo el acto administrativo materializado en el oficio número S-2014 000391 APROP-GRURE-22 de fecha 30 de diciembre de 2014, emanado del responsable hojas de servicio de la Policía Nacional, y mediante el cual se le negó el derecho al reconocimiento de los tres meses de alta al señor Intendente HAROL GARCIA BRAVO.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, en calidad de restablecimiento del derecho, ordénese a la Policía Nacional el reconocimiento y pago de los tres meses de alta a que tiene derecho el demandante señor HAROLD GARCIA BRAVO.

TERCERA: La liquidación de las anteriores condenas, deberá efectuarse mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia, y se ajustarán dichas condenas tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor, conforme a lo dispuesto por el Artículo 179 del Código Contencioso Administrativo.

CUARTA: Para el cumplimiento de la sentencia, se ordenará dar aplicación a lo establecido en la ley 1437 de 2011.

CAPÍTULO II.

HECHOS:

1.- El señor HAROLD GARCIA BRAVO, estuvo vinculado laboralmente en la Policía Nacional desde el día 14 de febrero de 1994, fecha en que ingresara como alumno a la escuela de Policía Simón Bolívar de la ciudad de Tulúa (V), egresando en el grado de patrullero el día 20 de febrero de 1995.

2.- El señor HAROLD GARCIA BRAVO permaneció en servicio activo desde el 14 de febrero de 1994 hasta el 5 de septiembre de 2010 fecha de notificación del retiro, acumulando un tiempo total de 16 años, 09 meses y once días.

3.-El Congreso de la República mediante la Ley 180 del 13 de enero de 1.995, otorgó facultades al señor Presidente de la República para desarrollar la carrera policial del Nivel Ejecutivo, con la prevención específica de que no podía desmejorar indiscriminadamente en ningún aspecto, al personal que estando en servicio activo de la Policía Nacional, ingresara a la nueva carrera (Nivel Ejecutivo), prevención que quedara plasmada en el artículo 7º, Numeral 5º, Parágrafo, de la Ley aludida, de la siguiente manera:

*Parágrafo. La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, **en ningún aspecto**, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo.*

4.- El decreto Ley número 132 de enero 13 de 1.995, por medio del cual se desarrolló la carrera del Nivel Ejecutivo, en su Artículo 182, reiteró la protección para los Agentes y Suboficiales que se homologaran al Nivel Ejecutivo, introduciendo la prohibición de desmejorar a dichos Servidores Públicos desde cualquier punto de vista, prohibición que quedara plasmada de la siguiente manera:

*Art. 82. Ingreso al Nivel Ejecutivo. **El ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional.***

5.- El señor HAROLD GARCIA BRAVO, fue dado de alta como patrullero el día 20 de febrero de 1995, quedando automáticamente inmerso en la carrera de nivel ejecutivo de la Policía Nacional en la cual escalafonó hasta ostentar el grado de Intendente.

6.- Con fecha 5 de septiembre de 2010 cuando HAROLD GARCIA BRAVO ostentaba el grado de Intendente y laboraba en el Departamento de Policía Valle, fue retirado del servicio activo de la Institución, **Por voluntad de la Dirección General .**

7.- Al momento del retiro del servicio activo (5 de septiembre de 2010), el señor HAROLD GARCIA BRAVO contaba con 16 años, 09 meses y 11 días al servicio de la Policía Nacional.

8.- Por haber laborado al servicio de la Policía Nacional por un lapso superior a 15 años, el señor HAROLD GARCIA BRAVO presentó derecho de petición ante el señor Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, solicitando el reconocimiento de una asignación de retiro.

9.- Mediante acto administrativo materializado en el oficio número 2619 GAG-SDP de fecha 30 de marzo de 2.011, el señor Director de la Caja de Sueldos de Retiro, negó la petición de asignación de retiro presentada por el señor HAROLD GARCIA BRAVO, argumentando que el Decreto Ley 4433 del año 2.004, Norma especial vigente a la fecha de retiro del actor, exige que los miembros del Nivel Ejecutivo acrediten un mínimo de 20 años de servicio cuando la desvinculación se produce por Voluntad de la Dirección General, para acceder al derecho de asignación de retiro, condición que no se cumplía para el caso del peticionario.

10.- Por ser contentivo de la respuesta a un derecho de petición, el oficio número 1619 GAG-SDP, de fecha 30 de marzo de 2.011 tiene la calidad de acto administrativo.

11.- Al negársele al señor HAROLD GARCIA BRAVO el derecho a la asignación de retiro por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, el actor interpuso medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a fin de que se le reconociera el derecho violado.

12.- Al Intendente® HAROLD GARCIA le fue reconocida asignación de retiro mediante sentencia oral No. 135 del 30 de septiembre de 2014 emanada del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga.

13.- Al otorgársele asignación de retiro el señor HAROLD GARCIA BRAVO elevó derecho de petición al Director General de la Policía Nacional a fin de que le reconociera y pagara los tres meses de alta a que tiene derecho por gozar de asignación de retiro.

14.- La Policía Nacional mediante oficio No. 000391 del 30 de diciembre de 2014 signado por el responsable de hojas de vida negó la petición argumentando que en la referida sentencia solo se obligó a la Caja de Sueldos De Retiro de la Policía Nacional a reconocer la asignación de retiro mas no a la Institución la cual no fue llamada como litisconsorcio necesario para intervenir en las pretensiones.

15.- La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional mediante resolución No. 1370 del 5 de marzo de 2015 ordenó el reconocimiento y pago de asignación de retiro al señor Intendente HAROLD GARCIA BRAVO en cumplimiento a la Sentencia emanada del Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Buga.

16- En la mencionada resolución se hace hincapié, en que el grado de Intendente equivale al de Sargento Segundo, por lo tanto la mencionada asignación es de acuerdo con las partidas para el grado equivalente, es decir, para el de Sargento segundo, según la equivalencia contenida en el artículo 12 del Decreto 132 de 1995 y artículo 9 del Decreto 1791 de 2000.

fecha 31 de Diciembre del 2.004 el Congreso de la República mediante la ley 923 del 2.004 en su artículo 1º, dio competencia al

Gobierno Nacional para que fijara el Régimen de Asignación de Retiro a los miembros de la Policía Nacional, sujetándolo a las normas objetivas y criterios que señaló en el Artículo 2 de la aludida Ley, donde se dispuso en el numeral 2.7, lo siguiente:

2.7. No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro o pensión o sustitución.

El tiempo de servicio exigido para tener derecho a la asignación de retiro será establecido en igualdad de condiciones para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Miembros del Nivel Ejecutivo que ingresen a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

Por su parte, en El Artículo 3º, Numeral 3.1, Inciso 2º, de la Ley 923, se dijo:

3.1. (...).

A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.

17.- La ley 180 de enero 13 de 1995 reguló aspectos de la Policía Nacional en su artículo 7º otorgó facultades extraordinarias al presidente de la república para entre otras desarrollara la carrera del NIVEL EJECUTIVO en la Policía Nacional, bajo los parámetros que fijo y en el párrafo-con que concluyó dicho artículo-determinó clara y expresamente una protección para el personal que estando al servicio de la Policía Nacional ingrese al nivel ejecutivo el cual no se podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de dicho personal. Aquí vemos que el actor ingreso a la Policía Nacional el día 14 de febrero de 1994.

18.- En el Decreto Ley 132 de enero 13 de 1995, desarrollo de las facultades de la Ley 180/95, al regular la carrera del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, en su artículo 82 se insiste nuevamente en la

especial protección-con el alcance que allí se determina-de quienes están al servicio de la Policía Nacional e ingresan al nivel ejecutivo. No podía este decreto ley ir en contravía del mandato legal de la Ley 180/95.

19.- La Ley 180 del 13 de enero de 1995, la cual otorga facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular y desarrollar en la Policía Nacional, las materias señaladas en ella, dentro de las cuales aparece en su artículo 7º la carrera profesional del Nivel Ejecutivo:

En su párrafo manifiesta: *La creación del Nivel Ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo."*

20.- .El Artículo 52 del Decreto 1091 de 1995, prescribe: TRES MESES DE ALTA. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que pase a la situación de retiro temporal o absoluto y tenga derecho a asignación de retiro o pensión, continuará dado de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en los artículos 64 y 68 del decreto ley 132 de 1995, continuará percibiendo la totalidad de la remuneración devengada en actividad correspondiente a su grado. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales.

21.- Por tanto el señor HAROLD GARCIA BRAVO, al tener derecho a la asignación de retiro, al estar disfrutando ya de ella, tiene derecho también al pago de los tres meses de alta pagaderos por la Policía Nacional.

22.- Ahora bien, La norma a la que se hace referencia (Decreto 1091 de 1995, art. 52), en ningún momento refiere de que la Institución Policía Nacional deba ser obligada a que se pague los tres meses de alta, como lo asevera la Institución en su respuesta a la solicitud del actor, pues claramente expresa que el único requisito para ello es que el personal del nivel ejecutivo pase a la situación de retiro temporal o absoluto y tenga derecho a la asignación de retiro, tal como es el caso del señor HAROLD GARCIA BRAVO

CAPÍTULO III. DERECHO

El acto administrativo acusado y que emanara de la Policía Nacional, mediante el cual se negara el derecho al pago de los tres meses de alta a HAROLD GARCIA BRAVO, se encuentra viciado de nulidad, por VIOLACIÓN DE LA NORMA SUPERIOR.

CAPÍTULO IV. NORMAS VIOLADAS

Con la manifestación de la Policía Nacional al expedir el acto administrativo materializado en el oficio No. 000391 del 30 de diciembre de 2014, se desconoció la Constitución Nacional en sus Artículos 2, 4, 5, 13, 23, 48, 53 Inciso 2º, 58; así mismo, se dejó de aplicar lo dispuesto en el Artículo 52 del Decreto 1091 de 1995; y se inaplicó la Ley 923 de 2004, por lo que a continuación expongo

CAPÍTULO V. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Se dice que con la decisión adoptada por la Policía Nacional se desconoció lo dispuesto en el Artículo 52 del Decreto 1091 de 1995; en virtud de que la entidad demandada argumentó que no se le concedía el derecho a los tres meses de alta por cuanto ella no fue obligada por la autoridad judicial a tal reconocimiento, que solo se obligó a la Caja de Sueldos de Retiro a reconocer una asignación de retiro al señor HAROLD GARCIA BRAVO.

Es claro, y así lo estipula la norma que el miembro del nivel ejecutivo a quien se le reconozca asignación de retiro o pase a situación de retiro temporal o absoluto tendrá derecho a que se le reconozca y pague tres meses de alta a partir de la fecha en que se cause la novedad, no indica la norma que dicho reconocimiento esté condicionado a la decisión de la autoridad judicial para que ello se cumpla.

En efecto, el tenor del Artículo 52 del Decreto 1091 de 1995, es el siguiente:

TRES MESES DE ALTA. El personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que pase a la situación de retiro temporal o absoluto y tenga derecho a asignación de retiro o pensión, continuará dado de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en los artículos 64 y 68 del decreto ley 132 de 1995, continuará percibiendo la totalidad de la remuneración devengada en actividad correspondiente a su grado. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales.

Por manera que no puede la entidad demandada poner una carga adicional a la que establece la norma como requisito para obtener el derecho al reconocimiento y pago de los tres meses de alta, el cual no es otro sino que al policial se le haya reconocido asignación de retiro y que haya pasado a la situación de retiro temporal o absoluto.

Ahora bien, sobre el reconocimiento de postulados Constitucionales, consagrados en los artículos 13, 48 y 53 que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los cuales deben tenerse en cuenta so pena de violar el principio de la buena fe y de la confianza legítima, esto dijo el Honorable Consejo de Estado:

Sentencia 110010325000200400109-01 Número Interno 1240-2.004 de fecha 14 de Febrero del 2.007, Sección Segunda, Consejero Ponente ALBERTO ARANGO MANTILLA, declarando la Nulidad del Artículo 51 del Decreto 1091 de 1.995, que en sus precedentes jurisprudenciales, a página 15 expone sobre el incumplimiento al condicionante expuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la ley 180 de 1.995 reflejado en una ausencia total de RÉGIMEN DE TRANSICIÓN en la reglamentación expedida, al siguiente orden :

Adicionalmente, dirá esta Sala que **al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como Suboficiales o Agentes en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un Régimen de Transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados**

constitucionales (arts. 13, 48, y 53) y legales (art. 7º Parágrafo de la ley 180 de 1.995) que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima (Subrayado y Resaltado fuera del texto).

Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificables o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido, solo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular caso el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto – se repite- era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, **existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del Nivel Ejecutivo.**(Resaltado y Subrayado fuera del texto)

El artículo 58 de la Constitución Nacional consagra como principio superior de la legalidad, que el Estado garantiza la propiedad “y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”.

Aparece obvio, que el derecho al reconocimiento y pago de los tres meses de alta, en condiciones especiales, es algo que han obtenido los miembros de la Policía Nacional de manera justa y con base en una norma legal que así lo ha determinado. No puede entonces, de ninguna manera desconocerse el derecho adquirido, pues la Constitución Nacional no deja vacíos en tal sentido, no puede una norma posterior, ni mucho menos una decisión de orden administrativo, desconocer tales derechos, puesto que ha habido ya una determinación anterior en firme, protegida por la norma mayor del sistema legal colombiano, definido esencialmente como un estado de derecho.

La Policía Nacional ha impedido a mi poderdante el disfrute de un derecho adquirido y consagrado en una norma especial, olvidándose por completo del verdadero derecho que se discute, ha hecho del derecho un conjunto de postulados inocuos, acudiendo a la oposición del derecho de las personas frente a las normas, perjudicando enormemente a mi poderdante, en este caso, no se ha cumplido con la voluntad normativa, de manera tal, que los fines buscados no se logren. La Constitución de 1.991 quiso poner fin a esta costumbre que

carcome las instituciones, debilita su capacidad reguladora y deslegitima al estado, por medio de la consagración del principio de eficacia, concepto que va más allá del cumplimiento puntual de lo prescrito por la norma y exige del funcionario una especial diligencia para que con dicho cumplimiento se logren ciertos resultados.

Observamos que el acto administrativo acusado es violatorio del Artículo 52 del Decreto 1091 de 1995 el cual es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades, de la especial protección del estado, y como vemos en este caso se desprotegió el derecho a los tres meses de alta que tiene mi cliente HAROLD GARCIA BRAVO, porque siendo un hombre de edad adulta, y habiendo cumplido con el requisito establecido en la norma, es decir, gozar de una asignación de retiro pagadera por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se le negó su derecho consagrado en la norma aludida.

El parágrafo del artículo 2 de la Constitución Política, preceptúa los deberes y responsabilidades de las autoridades, dentro de las cuales está la de proteger a las personas en su vida, honra y bienes.

CAPÍTULO VI PRUEBAS

DOCUMENTALES ADJUNTAS A LA DEMANDA:

Allego como tales las siguientes:

- 1.- Poder a mi favor, firmado y autenticado por el actor.
- 2.- Agotamiento de la vía gubernativa de fecha 10 de diciembre de 2014.
- 3.- Acto Administrativo demandado.
- 4.- Resolución No. 1370, emanada de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional por medio de la cual se le reconoció asignación de retiro al actor.
- 5.- Hoja de servicios policiales en la cual consta que laboró en la institución por 16, años, nueve meses y 11 días.

6. Constancia de la Procuraduría General de la Nación sobre la conciliación fallida.

CAPÍTULO VII. COMPETENCIA Y CUANTÍA

Es usted señor Juez administrativo del Circuito de Buga Valle competente para conocer de este proceso en única instancia por la naturaleza de la acción, por razón del domicilio del señor HAROLD GARCIA BRAVO, por cuanto al momento de retiro de la Policía Nacional prestaba sus servicios en jurisdicción administrativa del circuito de Buga y por la cuantía, la cual la estimo en la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 6.900.000,00) teniendo en cuenta que los tres meses de alta equivalen a tres meses de salario en servicio activo y el actor devengaba un salario de \$ 2.300.000,00 a la fecha de su retiro.

CAPÍTULO VIII FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

Invoco como normas de derecho las siguientes:

1. Artículos 2, 4, 5,13,23, 48, 53 Inciso 2º, 58 Y 90 de la Constitución Política.
2. Artículos 62, 85, 131 AL 134e, 135 y ss, 206 y ss del C.C.A.
3. Ley 446 de 1998 Artículos 39 y siguientes.
4. Ley 153 de 1887.
- 5.- Ley 4 de 1.992.
6. Decreto Ley 1091 de 1.995.
- 7.- Ley 923 del 12 de diciembre de 2.004.
- 8.- Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2.004.

CAPÍTULO IX.
LA ACCIÓN

La acción incoada es la de medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrada en el artículo 138 de la ley 1437 de 2011.

CAPÍTULO X.
PROCEDIMIENTO

El proceso habrá de rituarse por el procedimiento ordinario, indicado la ley 1437 de 2011.

CAPÍTULO XI.
NOTIFICACIONES

La parte demandada en la Carrera. 59 No. 26-21 CAN Bogotá.

Las del demandante y las del apoderado judicial en la Secretaría del Despacho, o en la carrera 4. Nro.9-17 Oficina 209 edificio Marchant (Cali), Tel. 8881154, celular 3113907410, correo electrónico arcapi24@hotmail.com

CAPÍTULO XII
ANEXOS

Acompaño poder, copia de la demanda y de sus anexos para dar traslado a la parte demandada, al Representante del Ministerio Público, a la agencia de defensa jurídica del Estado; y copia sencilla de la demanda para el archivo del Tribunal.

Del señor Juez,

Atentamente,

1

ARNOL CARABALI PIZARRO
Cc. No. 16.881.665 de Florida Valle
T.P. 93930 del C. S. J.

